

**INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA,  
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO  
EN LA INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO  
DE LA UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL**

**Barcelona, 5 de julio de 2005**

Muy buenos días a todos.

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad Ramón Llull su invitación para participar en este acto.

Permítanme que este agradecimiento lo personalice en su Rectora, Esther Giménez-Salinas, que me ha dedicado tan amables palabras de presentación.

Gracias también a todos ustedes por su asistencia a este acto que inaugura formalmente la Universidad de Verano Ramón Llull, que tiene como lema "ser y saber", un lema que casa muy bien con la filosofía que ha presidido los denominados "cursos de verano".

Creo sinceramente que el éxito y la consolidación de los Cursos de Verano, que se organizan y desarrollan en estos meses por todo nuestro país son, sobre todo, una muestra, un síntoma de vitalidad de nuestra Universidad y de nuestra sociedad.

Vitalidad de las universidades que han sido capaces de romper las barreras del aislamiento para abrirse decididamente a la sociedad, conectando con los intereses, problemas y retos más actuales. Y vitalidad de la sociedad española que demanda cada vez más formación, más información y más comunicación con la ciencia.

Creo que hay pocos foros tan oportunos como los foros universitarios para reflexionar, debatir y llegar a conclusiones. No sólo porque la Universidad es el espacio idóneo para pensar, para realizar una reflexión serena, alejada de la presión de la inmediatez política y mediática, sino porque este tiempo veraniego, finalizados los periodos ordinarios de sesiones en los parlamentos, nos permite tomar la necesaria –diría que imprescindible- distancia para abordar algunas cuestiones.

Y creo que como sociedad, ese ejercicio del pensamiento profundo, objetivo, no marcado por la urgencia, ni por el dogmatismo, nos resulta imprescindible. Con mucha frecuencia, al manifestar opiniones sobre temas de trascendencia política y social, sobra dogmatismo y falta análisis.

Los cursos universitarios de verano, por tanto, como foros de intercambio serenos y plurales, contribuyen a aumentar la densidad de nuestra vida cultural para afrontar

los problemas del momento con perspectiva. El diálogo, la capacidad de argumentar, la claridad conceptual son las señas de identidad de una sociedad abierta y tolerante, que asume como primer deber cívico el respeto y consideración de todos sus miembros.

A la hora de tomar una decisión sobre mi intervención en este importante foro, consideré distintos factores, en primer lugar quería que el tema fuese común a todas las sociedades democráticas, quería también que fuese de actualidad, pegado al terreno, aunque no necesariamente pegado a la agenda política inmediata.

Y me decidí por abordar el desafío que, para la gobernabilidad, representa la complejidad de las relaciones nacionales e internacionales en el Siglo XXI.

Es ya un lugar común hablar del siglo XX como del "siglo corto". Su comienzo habría tenido lugar al inicio de la I Guerra Mundial en 1914, y su fin con la caída del socialismo de Estado o comunismo en 1989. Con ello se abre una cesura en la historia, que permite hablar de un antes y un después en el proceloso devenir de la humanidad.

¿Qué es lo que cambió? Hoy disponemos ya de la suficiente perspectiva para poder responder a esta pregunta con cierta seguridad. Por llevarlo a una explicación sintética, lo que se produjo fue el final del mundo bipolar, esa división entre bloques –el demócrata liberal de economía capitalista y el socialista de Estado de economía planificada- que acompañó al mundo a lo largo de cuatro décadas.

Si la revolución bolchevique fue el acontecimiento que más claramente marcó al siglo XX, el estruendoso y pacífico final del experimento que allí se inicia puso las bases para conformar el escenario del siglo XXI. Lo que caracterizó al mundo que habíamos perdido, al menos desde 1945, fue, además de la Guerra Fría, un proceso de descolonización acelerado y el establecimiento del compromiso socialdemocrático, la implantación del Estado de Bienestar en la mayoría de las democracias más desarrolladas.

El nuevo orden que poco a poco comienza a hacerse sentir recompone este cuadro de múltiples maneras. En primer lugar, la democracia liberal, hecha de esa extraña mezcla de parlamentarismo, Estado de derecho y economía de mercado, pasa a convertirse en el único sistema político universalmente legítimo.

Mal que le pese a Fukuyama, y ya lo sabemos bien, eso no va a significar el "fin de la historia". Pero sí es cierto que el conflicto ideológico pasa a ser secundario frente a un paulatino incremento de los conflictos identitarios. La importancia política del factor económico que nos venía acompañando desde la Revolución Industrial va a ceder el terreno a un reverdecimiento de lo cultural e identitario.

El segundo factor que merece ser destacado es la explosión de la globalización económica, muy favorecida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto está produciendo una debilitación progresiva del Estado-nación y, como su corolario natural, un repliegue de la implicación pública en el fortalecimiento de la red de protección social.

Por último, asistimos a la aparición de los Estados Unidos como única superpotencia mundial y a nuevos procesos de integración supranacional, que encuentran en la Unión Europea su modelo más avanzado.

Hemos accedido a un mundo mucho más complejo e interrelacionado que aquél al que nos habíamos acostumbrado en el Estado de posguerra. Ante este estado de cosas, el mayor desafío que se presenta a la política en este siglo XXI es el de la *governabilidad*, el poder recuperar la capacidad de acción de una política debilitada por la creciente interdependencia global y la complejidad intrínseca a las sociedades contemporáneas.

Y para conseguirlo es imprescindible actuar en un doble ámbito: dentro del propio Estado, en las sociedades internas, y en la esfera trasnacional, ya sea mediante el reforzamiento de los mecanismos de integración supranacional o mediante la puesta en marcha de mecanismos de gobernanza global.

Este doble ámbito de acción debe ir en paralelo. No conseguiremos mejorar la gobernabilidad sin una más decidida acción exterior; pero tampoco podremos aspirar a jugar un papel relevante como actores internacionales si no disponemos de una sociedad cohesionada y con una importante capacidad para dinamizar el entramado social interno.

Para gobernar con eficacia y conseguir realizar el objetivo de instaurar una sociedad cada vez más justa, democrática y competitiva es preciso trabajar en ambos frentes simultáneamente.

Empecemos por el primero de ellos, el de la acción exterior.

Las nuevas condiciones impuestas por la globalización obligan a los Estados a introducir una nueva sensibilidad selectiva respecto a su capacidad para lidiar con su entorno.

Ninguno puede satisfacer sus funciones tradicionales apoyándose exclusivamente en sus propios recursos. Se ven obligados a reaccionar ante condiciones que se escapan a su control; dependen cada vez más de factores que están fuera de su propio campo de influencia y del de sus ciudadanos.

Es la consecuencia obvia del marco general de la competitividad global y de la presencia de los nuevos poderes "laterales" del sistema financiero transnacional y de las multinacionales, que han encontrado una verdadera mina de oro en la competencia entre Estados.

Estos pueden, por ejemplo, intentar hacer más atractivo su territorio para estimular la importación del capital y las inversiones productivas necesarias, o para tener acceso a las nuevas tecnologías, pero no poseen influencia directa sobre las redes de producción global. No tienen más remedio que "pactar" con ellas las condiciones de su participación en las mismas.

Y ello, como hemos visto antes, le exige un doble movimiento regulativo: "hacia dentro" de sus propias fronteras, para preparar a su sociedad para hacer frente a los desafíos de la competitividad internacional presente y futura; y "hacia afuera", llegando a acuerdos con otros Estados y con una ilimitada y heterogénea cantidad de agentes globales: organizaciones internacionales, empresas y entidades financieras multinacionales, medios de comunicación o representantes de eso que se denomina "sociedad civil internacional".

Si observamos la acción de la mayoría de las burocracias *internas* de los Estados veremos también cómo se orientan cada vez más hacia los foros regionales e internacionales; no es algo de la competencia exclusiva de los órganos específicamente encargados de la "política exterior".

Los problemas sobre los que deben actuar los Estados no se reducen, como es lógico, a una defensa de la competitividad económica propia en un mercado internacionalizado. Están también todos los problemas derivados de la aparición de

nuevos "bienes públicos globales"; es decir, aquellos que no pueden ser satisfechos por cada Estado de forma individual, sino que exigen la colaboración entre ellos.

El ejemplo obvio son los problemas medioambientales –destrucción de la capa de ozono, cambio climático, etc.-; los problemas derivados de las amenazas a la paz mundial –como el control y supervisión de las pruebas nucleares-; los generados por la delincuencia internacional; algunas de las consecuencias de la aplicación de determinados desarrollos tecnológicos; o la imprescindible lucha contra el hambre.

En un nivel más regional nos encontramos también con desafíos similares que exigen una cooperación transfronteriza más restringida, como los flujos migratorios en América del Norte o Europa Occidental o, por ejemplo, la contaminación en el Mediterráneo o el mar Báltico.

Y están también eso que ahora se califica como "problemas *glocales*": aquellos que afectan al ámbito local pero que se encuentran en varios lugares del mundo y demandan una importante cooperación internacional.

Un ejemplo a este respecto puede ser la administración de las megalópolis, la predicción y la defensa frente a desastres naturales, la desertización o los problemas de aprovisionamiento de agua.

El hecho es, como afirma el politólogo británico David Held, que hoy vivimos en "comunidades de destino entrelazadas". Puede que hayamos alcanzado al fin ya ese estadio vislumbrado por Kant en el que los "hombres ya no pueden diseminarse hasta el infinito por el globo" y deben hacer frente a su común convivencia planetaria.

La globalización nos ha enfrentado a nuestra común humanidad y a los límites de un mundo que exige emprender acciones colectivas con "intencionalidad cosmopolita".

Debemos acercarnos a algo así como a un *derecho de ciudadanía mundial*, por seguir con expresiones kantianas. O, al menos, a un nuevo orden mundial capaz de preservar un mínimo de acción colectiva común, de *gobernanza global*, en el que la eficacia de la acción política vaya de la mano de un exquisito respeto de los derechos humanos, las peculiaridades culturales y la preservación de nuestro medio para las generaciones futuras.

Como venimos diciendo, un gran número de problemas con los que nos encontramos en el marco del Estado-nación no pueden ser resueltos directamente en este ámbito, requieren soluciones que pasan por la cooperación internacional. La cooperación no es algo opcional. Es una necesidad irrenunciable en una situación en la que existe un sistema global único, pero una realidad social y política fragmentada.

Urge calmar la tensión creada entre, de un lado, la creciente interdependencia económica y tecnológica global, y de otro, la heterogeneidad cultural y la fragmentación política. Para resolver este problema este Gobierno ha optado por fortalecer el proceso de integración europea y apoyar decididamente el protagonismo de la ONU en la creación de un sistema de gobernanza global.

Además, y para facilitar la superación de los conflictos derivados de la heterogeneidad cultural, estamos promoviendo activamente el desarrollo de un esquema de cooperación intercultural, eso que el Presidente Rodríguez Zapatero ha calificado como "alianza de civilizaciones".

A nadie se le oculta que, tras el rechazo mediante referéndum de la Constitución Europea en Francia y Holanda, el proyecto de la unificación europea ha entrado en una nueva fase de incertidumbre. Pero no ha perdido ni un ápice de su sentido último.

Con independencia de que tuviera su origen histórico en la promoción de la paz en Europa, algo ya de sobra conseguido, su mayor justificación en la actualidad reside en su capacidad para reforzar la capacidad de la política en el mundo de la globalización.

A este respecto el filósofo alemán Jürgen Habermas advertía en el *Nouvel Observateur* antes del referéndum francés, que la izquierda no se debía dejar engañar por la actitud soberanista y nacionalista que en el fondo se escondía en las opciones por el *no*, por mucho que lo ocultaran detrás de su denuncia de la "Europa de los mercaderes".

Contrariamente a lo afirmado por muchos de sus líderes, la única manera de que la política estuviera a la altura de los mercados es, precisamente, en el marco de una Europa más unida y fuerte que nunca.

La capacidad de regulación del Estado-nación no sirve ya para hacer frente a las consecuencias ambivalentes de la mundialización.

Sólo puede recuperarse, en defensa del modelo social europeo y de una más activa política común de justicia y seguridad, a través de una más intensa cooperación entre sus miembros.

Por citar a Habermas, "una izquierda más activa y lúcida hubiera incitado ya hace tiempo a una armonización mucho más acentuada, incluyendo en ella a las esferas de la política económica y fiscal".

Una Europa con capacidad de jugar un papel activo como actor global pasa también por una acción exterior unitaria. El propio Willy Brandt llegó a vislumbrar el futuro de la cooperación internacional a partir de grandes organizaciones supranacionales interactuando entre ellas.

Sea como fuere, la actual crisis europea debe invitar a repensar el proyecto europeo. No para mutilarlo o hacerlo retroceder, sino, más bien al contrario, para renovarlo y profundizarlo a partir de una relegitimación popular de todo el proceso.

Para ello es imprescindible superar la ausencia de una auténtica esfera pública paneuropea, las carencias que a veces surgen de la falta de medios de comunicación no mediados por el filtro nacional, así como la necesidad de promover una mayor presencia e implicación de los partidos y asociaciones en el ámbito europeo.

Puede que, en efecto, uno de los puntos esenciales del debate sea el famoso "déficit democrático" que siempre se ha imputado a la UE, la falta de congruencia existente entre la cada vez mayor incidencia sobre nuestras vidas de las políticas europeas y nuestra escasa capacidad para configurarlas.

Otro aspecto de la acción exterior es el fomento de la multilateralidad que significa el apoyo a las actividades y fines de la ONU. Y un importante pilar a estos efectos es el proyecto de la *Alianza de Civilizaciones*.



Aquí el punto decisivo estriba en saber suplir la tesis neoconservadora del conflicto o “choque de civilizaciones” por una visión que apueste por tender puentes y ampliar los consensos entre la diferentes culturas del mundo.

Estamos en contra de la idea que familiarizara Huntington en su famoso libro, de que existe algo así como una radical *inconmensurabilidad* entre culturas y grupos que hace inviable la posibilidad de alcanzar una convergencia en torno a principios morales universalmente compartidos. Y que es precisamente en estas diferencias culturales donde se encuentra la fuente de los conflictos del futuro.

Creemos, por el contrario, que ninguna comunidad se encuentra sellada dentro de su universo moral culturalista y que es posible potenciar el entendimiento necesario para sostener una ética global sobre la que se erijan los fundamentos de un nuevo orden internacional más justo.

Siempre dentro del más exquisito respeto por las diferencias culturales, pero sin renunciar a afirmar los valores de la cultura de los derechos humanos y, como su lógica consecuencia, una mayor solidaridad entre los pueblos del mundo.

El ya citado David Held ha sostenido con razón, que la única alternativa al Consenso de Washington neoliberal es un cosmopolitismo socialdemocrático. Y esto equivale a la realización del proyecto socialdemócrata trasladándolo al más extenso ámbito de la regionalización y la globalización.

Junto a la promoción de las estructuras del Estado de derecho y las instituciones democráticas –y quizá precisamente por eso- debería figurar también el establecimiento de una amplia justicia social capaz de aminorar las radicales diferencias de oportunidades de vida que existen actualmente en el mundo.

Lo que está claro es que no podemos darnos por satisfechos con las actuales políticas de desarrollo y cooperación internacional, por no mencionar las aún más deficientes de seguridad. La promoción de una nueva política no es algo opcional, sino una necesidad ineludible.

Pasemos ahora al ámbito interno del Estado. Hoy lo más apreciable en esta dimensión es la necesidad de recomponer la gobernabilidad perdida mediante un reforzamiento de las energías democráticas y una constante generación de sinergias entre poderes públicos y sociedad civil.

La combinación de Estado *fuerte* –con independencia de su tamaño- y sociedad civil fuerte ha resultado dotar a las afortunadas poblaciones que lo poseen de una extraordinaria capacidad competitiva en una sociedad globalizada, o ha permitido al menos que éstas funcionen de forma más autónoma y soberana.

Contrariamente al neoliberalismo, no creemos que la mera auto-organización social y el libre juego del mercado sean capaces por sí mismos de ofrecer una solución satisfactoria a los problemas sociales.

La implicación decidida y activa de los poderes públicos es imprescindible. Y es irrenunciable entrar en una nueva etapa marcada por una renovada atención a lo público, de defensa de la decisiva importancia que tiene el sector público para una sociedad decente y justa.

Todo ello sin ignorar, que si bien el Estado dispone, qué duda cabe, de todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo la mayoría de sus funciones tradicionales, su efectividad depende en última instancia de la cooperación social. Sus posibilidades de actuación en esta necesaria colaboración con la sociedad es prácticamente ilimitada.

Aunque a nadie se le escapa que están en relación con la propia fuerza y el nivel organizativo de los intereses en competencia, con los “recursos y limitaciones” del sistema político concreto, con las disposiciones presupuestarias, con la propia cultura política o capital social o con otras condiciones más o menos contingentes, que aluden a los ya conocidos problemas de la gobernabilidad.

Aquello que debe medir el acierto de la acción de gobierno no depende necesariamente de que haya una mayor o menor presencia pública en la gobernanza de la sociedad, sino de su capacidad para satisfacer e impulsar fines colectivos.

Lo decisivo a este respecto es la existencia de un *ámbito institucional permanente* que vele por la defensa de los intereses generales y establezca las reglas y actuaciones fundamentales a estos efectos.

El éxito de un Estado pasa por su capacidad para seguir funcionando como el referente fundamental a partir del cual pueda concebirse la “unidad política” de la

sociedad. Que por muy fragmentaria que ésta sea pueda seguir encontrando en él una referencia colectiva.

El gran logro de los mejores Estados consistió en haber conseguido establecer un sistema de seguridad y cooperación institucionalizado y una concepción pública de la justicia capaz de arbitrar entre los diferentes intereses en conflicto, el ofrecer un marco de acción e integración social común.

El Estado es algo más que una *empresa* pública de seguridad o de fomento de la competitividad internacional. Su función como instrumento de simbolización y gestión de los intereses generales por encima de los diferentes intereses particulares es, sin embargo, el aspecto más amenazado.

Los peligros provienen sobre todo de la lenta pero constante evaporación de sus fronteras, de su propio fraccionamiento identitario interno, del constante movimiento hacia lo local, de la tendencia a subvertir los intereses públicos en nombre de los privados, de la quiebra del principio solidario que sostenía la cohesión social.

Pienso que esta capacidad *unificadora* del Estado es la que, a la postre, sigue haciendo de él una pieza imprescindible en la nueva arquitectura de la globalización y en momentos de fraccionamiento y pluralización de las sociedades actuales. Y luchar por preservarla debería ser uno de nuestros objetivos fundamentales.

Lo decisivo, además, es percibir cómo el aumento de la complejidad social no exige más o menos Estado, sino *otro* Estado, uno más proclive a valerse de sus instrumentos –jurídicos, financieros, de negociación– del modo más eficaz posible según las circunstancias particulares y la diferente capacidad de su liderazgo político.

No hay, por tanto, una “convergencia” plena de los Estados hacia una única estrategia de acción política o económica “neoliberal”, sino una readaptación o ajuste permanente para hacer frente a los nuevos desafíos. Las transformaciones de la forma estatal de hecho generan cambios en los modos, el estilo y los instrumentos del gobierno, pero no un rechazo de su responsabilidad.

Con todo, y en tanto que socialistas, no podemos darnos por satisfechos con una mera "gestión eficaz". También debe ser justa. Compartimos la célebre expresión de John Rawls de que "la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales", que ha de prevalecer sobre otros criterios de organización de la sociedad como la eficacia o la estabilidad.

Lógicamente, una vez asegurada esta prioridad, la justicia será tanto más perfecta y preferible cuanto mejor satisfaga estos otros atributos de la organización social. Y en eso estamos.

También en realizar nuestro compromiso por conseguir una mayor implicación ciudadana en la gobernanza general de la sociedad. Si la mayoría de los ciudadanos se apartan del sistema político como un instrumento de cambio social, se desvanece la capacidad de la política para influenciar a la sociedad y transformarla en una dirección progresista.

Reintegrar a los ciudadanos en la vida política se convierte en una prioridad decisiva. Nuestro compromiso por la sociedad pasa, pues, por reforzar la democracia y acercar las instituciones públicas a los ciudadanos. En suma, buscar una nueva ruta para recobrar la confianza en la política y en la legitimidad de la acción política.

Es bien sabido que cuando el funcionamiento de la democracia es severamente enjuiciado por los ciudadanos entra en un importante problema de legitimación.

Es un problema bien perceptible en todas las democracias avanzadas, donde se manifiestan señas de insatisfacción o desafección política en la disminución de la participación electoral o la afiliación a los sindicatos; en la pérdida de peso de la imagen de los políticos o del interés de los ciudadanos por las cuestiones públicas; en el papel de los parlamentos en la percepción social o en la disminución de la identificación con los partidos, la volatilidad electoral o la desconfianza en los gobernantes.

Un conocido filósofo francés, Marcel Gauchet, lo resumía con la expresión de "fatiga civil". Es muy posible que todo ello obedezca a la sobrecarga cognitiva que muchas veces se exige a la ciudadanía a la hora de poder evaluar la complejidad y diversidad de cuestiones que se someten a la discusión pública.

O puede que tenga que ver también con una percepción negativa del enfrentamiento, muchas veces cainita y cargado de furia y ruido, al que obliga la polarización entre Gobierno y oposición. O, simplemente, a nuestra incapacidad para saber acercarnos a sus problemas.

El caso es que dichas disfunciones de la democracia están ahí y no podemos ignorarlas. De ahí la importancia de promover un gobierno próximo, responsable y transparente, que no sea sólo "del" pueblo, sino que también gobierne "para" él.

Para concluir, me gustaría hacer una última reflexión. Alguien dijo que la democracia es como una silla de tres patas en la que, aun habiendo apuntalado dos de sus puntos de apoyo –elecciones libres y limpias y derechos civiles y políticos-, todavía cojea en la pata de la transparencia y el rendimiento de cuentas de las instituciones representativas.

Por eso es ahí donde estamos realizando nuestros mayores esfuerzos. Ahí y en la mayor implicación ciudadana en la política.

Hay que trabajar más sistemáticamente en una "teoría de la ciudadanía", que sirva para estimular el ejercicio de eso que recibe el nombre de "virtudes cívicas".

Virtudes que presuponen la interiorización por parte del suficiente número de ciudadanos de una "dimensión pública" paralela a la persecución de sus intereses privados.

Sin su presencia es difícil de imaginar eso que ahora recibe el calificativo de "democracia de calidad". La democracia carece de algo así como un dispositivo automático que garantiza su renovación continua. Requiere de la implicación ciudadana.

Y nosotros los políticos debemos hacer el esfuerzo de facilitar la permanente reconstrucción de un espacio público en el que siga siendo posible alimentar y continuar ilusionando a los que todavía se ven y ejercen como ciudadanos.

Muchas gracias por su atención.